

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 1020-2009

ANCASH

-1-

Lima, cuatro de mayo de dos mil diez.-

VISTOS; interviniendo como ponente el señor Lecaros Cornejo; el recurso de nulidad interpuesto el encausado Narcizo Antonio Lázaro Barreto contra la sentencia de fojas cuatrocientos cuatro, del dieciséis de diciembre de dos mil ocho; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO**: **Primero**: Que el encausado en su recurso formalizado de fojas cuatrocientos catorce alega que el Tribunal Superior no valoró correctamente la prueba de cargo; que las transcripciones de las grabaciones que alcanzó su coencausada no fueron efectuadas en sede jurisdiccional, por lo que carecen de las garantías de ley; que el Tribunal otorgó valor probatorio a una serie de copias simples; y que se demostró que su coencausada le entabló una demanda por obligación de dar suma de dinero, precisamente por la conducta que motiva el presente juicio, por lo que el Tribunal debió declarar fundada excepción de cosa juzgada que promovió. **Segundo**: Que según la acusación fiscal de fojas doscientos diecinueve, el encausado Narcizo Antonio Lázaro Barreto, en su condición de Director del Colegio Nacional "Santa Úrsula" del caserío de Hualcán comprensión de la Provincia de Carhuaz, solicitó y recibió una ventaja económica de parte de la sentenciada Vera Mejía, a fin de asignarle la plaza de docente en la especialidad de Historia y Geografía. **Tercero**: Que, ahora bien, la transcripción de la cinta de audio que obra a fojas siete demuestra que entre los encausados existieron tratativas ilegales con la única finalidad de negociar, para el caso del encausado Lázaro Barreto, y acceder, para el caso de Vera Mejía, a la plaza de profesora del

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 1020-2009

ANCASH

-2-

Centro Educativo Santa Úrsula que dirigía el encausado antes citado, siendo así tal fuente de prueba resulta, por cierto, el principal elemento incriminador, que a mayor abundamiento existen otros medios que la dotan de la suficiencia necesaria para generar convicción de la responsabilidad penal del encausado; que, en este sentido, si bien el recurrente cuestionó la legalidad de la citada transcripción por no haber contado con el concurso del Ministerio Público en su elaboración, también lo es que en el plenario el Tribunal convocó tanto al Fiscal Superior cuanto a la defensa de ambos acusados para que realicen las transcripciones del citado audio en las partes que consideren pertinentes y útiles a sus propuestas, de suerte que también en dicho estadio procesal se advierten los mismos pasajes en los que el encausado hace mención a las tratativas ilegales puntualizadas, por lo que dicha actuación convalida, palmariamente, el contenido del acta de transcripción que se cuestiona, pues tanto la parte acusadora y acusada, en igualdad de condiciones, plantearon ante el Tribunal sus posiciones en defensa de los intereses que cada uno tutelan. **Cuarto:** Que, de igual modo, el cuestionamiento que realiza el encausado Lázaro Barreto sobre la legalidad de la valoración táctica efectuada a los documentos que en copia simple obran en el expediente -relativo al cuadro de horas de educación secundaria del año escolar dos mil cuatro con el que el encausado garantizaba la presencia de plazas vacantes en la institución que dirigía-, no encuentra amparo porque éstos no sólo fueron alcanzados al Tribunal por la sentenciada Vera Mejía -aparejada a fojas cuatro- sino que también, coincidentemente, contienen los mismos datos del oficio que fue alcanzado por la UGEL -que obra a fojas trescientos veinticuatro-, por lo que sumados a la transcripción del audio y a la

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 1020-2009

ANCASH

-3-

uniformidad de la sindicación de la sentenciada Vera Mejía -véase las declaraciones de la misma a fojas ochenta y cuatro (preliminar), doscientos setenta y ocho (sumarial) y trescientos cuarenta y tres (plenarial)-, hacen que la tesis acusatoria adquiera mayor firmeza que la tesis de defensa que sostiene el encausado, más aún si se advierte la realidad de la deuda en el título valor que el encausado suscribió ante el incumplimiento del pacto irregular que sostuvieron, actuación de la que además se desprende que el encausado Lázaro Barreto aceptó que recibió el dinero de la sentenciada y aunque adujo que lo hizo en calidad de préstamo ante el intempestivo decaimiento en la salud de su progenitura, lo cierto es que en autos no obra medio alguno que acredite tal hecho, por lo cual la tesis inculpativa reúne mayores elementos de credibilidad y, como tal, es constitucionalmente aceptable y capaz de desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que le asiste al encausado Lázaro Barreto. **Quinto:** Que, de otro lado, la excepción de cosa juzgada que planteó la defensa del encausado Lázaro Barreto carece de virtualidad procesal porque no reúne los requisitos de identidad, pues evidentemente en la vía civil sólo se reclamó el cumplimiento del compromiso de pago, tema totalmente distinto al que se debate en sede penal, en el que se pretende dilucidar una solicitud indebida de dinero de un funcionario público a cambio de favorecer a un tercero para que acceda a un puesto laboral en la institución educativa que estaba bajo su dirección. **Sexto:** Que, por otra parte, la pena impuesta resulta coherente a los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad fijados en los artículos dos, cuatro, cinco, siete y ocho del Título Preliminar del Código Penal y a los criterios y circunstancias contenidas en los artículos cuarenta y seis y cuarenta

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 1020-2009

ANCASH

-4-

y siete del mismo cuerpo legal, así la sanción impuesta recoge lo expresado anteriormente pues valoró las circunstancias del hecho, la naturaleza del delito, el grado de los deberes infringidos y las condiciones personales del agente; que, asimismo, la reparación civil fijada responde a la naturaleza del daño causado y a los perjuicios ocasionados por la comisión del delito. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en sentencia de fojas cuatrocientos cuatro, del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, en el extremo que condenó a Narcizo Antonio Lázaro Barreto por delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años e inhabilitación por el periodo de un año, y fijó en trescientos nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte agraviada; con lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso; y los devolvieron.-

S.S.

LECAROS CORNEJO.

PRADO SALDARRIAGA.

PRINCIPE TRUJILLO.

CALDERÓN CASTILLO.

SANTA MARÍA MORILLO.